a su conservación y manejo, las que podrán incluir su designación como áreas protegidas bajo alguna de las categorías de manejo previstas en el presente Decreto.”

Que según el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP), en la actualidad existen 1459 áreas protegidas, y otros ecosistemas estratégicos, para cuyo manejo efectivo y gobernanza en los diferentes ámbitos de gestión, se requiere continuar destinando recursos para garantizar su sostenibilidad.

Que de conformidad con el “Informe de avance procesos nuevas áreas y ampliaciones del ámbito de gestión nacional, liderado por Parques Nacionales Naturales de Colombia”, Parques Nacionales Naturales avanza en la consolidación de ocho (8) procesos de nuevas áreas y la ampliación de siete (7) áreas, siguiendo la ruta de declaratoria aprobada mediante Resolución 1125 de 2015.

Que con base en la información recopilada de las instituciones que hacen parte del SINAP, la Coordinadora del Programa Herencia Colombia, mediante comunicación del 6 de mayo del 2022, justificó que los recursos estimados para asegurar la protección, preservación, restauración y uso sostenible de 20 millones de hectáreas de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos se calcula en aproximadamente \$449.678.601.137,5 pesos.

Que estos recursos se requieren entre otros para: (I) caracterizar la situación de uso, ocupación y tenencia (enfoque de trabajo en AP regionales está asociado a la reconversión de los sistemas productivos); (II) aumentar el reconocimiento de usos sostenibles: ancestrales y tradicionales, nuevos usos, usos comunitarios y sistemas productivos asociados al cumplimiento de los objetivos de conservación de las áreas protegidas y (III) fortalecer el ajuste e implementación de mecanismos para la sostenibilidad financiera (municipales, departamentales y/o nacionales) que ya existen.

Que conforme con lo anterior, se hace necesario adoptar los lineamientos señalados en el artículo 35 de la Ley 2169 de 2021, en lo que hace referencia a la protección, preservación, restauración y uso sostenible de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. *Objeto*. La presente resolución tiene por objeto adoptar los lineamientos señalados en el numeral 1° del artículo 35 de la Ley 2169 de 2021 en relación con la protección, preservación, restauración y uso sostenible de áreas y ecosistemas estratégicos.

Artículo 2°. *Lineamientos de utilización de los recursos del impuesto al carbono*. Para las vigencias fiscales del 2023 en adelante, del total de recursos a que hace referencia el numeral 1° del artículo 35 de la Ley 2169 del 2021, se utilizará el 17.35% de la destinación específica del Impuesto Nacional al Carbono para financiar las estrategias para la protección, preservación, restauración y uso sostenible de áreas y ecosistemas estratégicos.

Artículo 3°. *Ámbito de Aplicación*. Con el fin de garantizar la protección, preservación, restauración y uso sostenible de áreas y ecosistemas estratégicos, los recursos a que hace referencia el artículo 2° de la presente resolución, se deberán utilizar entre otros para el desarrollo de:

- La protección, preservación, restauración y uso sostenible de las áreas protegidas existentes del SINAP, así como para la declaratoria y ampliación de las áreas protegidas marinas y terrestres y su preservación, restauración y uso sostenible a partir de las metas de conservación que sean definidas para el país.
- Analizar periódicamente la efectividad de manejo de las áreas protegidas y los subsistemas que las conforman, y su impacto teniendo en cuenta elementos de resiliencia climática, aportes al bienestar (social, económico, cultural) y la reducción de emisiones.
- Implementar acciones priorizadas de control y vigilancia de las áreas protegidas y de las que se declaren.
- Diseñar e implementar una estrategia de participación e involucramiento de actores que considere la generación o fortalecimiento de espacios de toma de decisiones.
- Desarrollar acuerdos de conservación de las áreas protegidas entre actores estratégicos (especialmente comunidades locales -campesinas y grupos étnicos-) que permitan armonizar diferentes formas de manejo del territorio.
- Apoyar la formulación e implementación de acuerdos sectoriales para la reducción de la deforestación y otros cambios de coberturas naturales en áreas circundantes a las áreas protegidas y estrategias de importancia para la conservación.
- Gestionar programas de asistencia técnica dirigidos a buenas prácticas productivas sostenibles y cadenas de valor basados en la transformación y comercialización de productos derivados de la biodiversidad.
- Implementar buenas prácticas sostenibles productivas que promuevan la conectividad y la conservación en el paisaje y la resiliencia al cambio climático
- Implementar sistemas de aprovechamiento sostenible de la naturaleza con fines comerciales en las áreas protegidas (turismo, fauna, pesca, artesanías, forestal y otros productos maderables y no maderables, acceso a recursos genéticos)
- Implementar acciones de restauración, rehabilitación y/o recuperación en zonas críticas para la conectividad.
- Caracterizar la situación de uso, ocupación y tenencia (enfoque de trabajo en AP regionales está asociado a la reconversión de los sistemas productivos

- Aumentar el reconocimiento de usos sostenibles: ancestrales y tradicionales, nuevos usos, usos comunitarios y sistemas productivos asociados al cumplimiento de los objetivos de conservación de las áreas protegidas
- Fortalecer el ajuste e implementación de mecanismos para la sostenibilidad financiera (municipales, departamentales y/o nacionales) que ya existen.
- Las demás que estime el Ministerio que tengan relación con el objeto del presente artículo.

Artículo 4°. *Vigencia*. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el *Diario Oficial*.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 17 de mayo de 2022.

El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Carlos Eduardo Correa Escaf.
(C. F.).

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 1421 DE 2022

(mayo 19)

por la cual se adopta la Política Institucional de Llegada a Territorio del Departamento Nacional de Planeación.

La Directora General del Departamento Nacional de Planeación, en uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas por el artículo 209 de la Constitución Política, el artículo 65 de la Ley 489 de 1998, el numeral 4 del artículo 3° y numeral 1 del artículo 6° del Decreto 1893 de 2021, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con el artículo 209 de la Constitución Política “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de sus funciones”.

Que de conformidad con el artículo 65 de la Ley 489 de 1998 “La estructura orgánica y el funcionamiento de los departamentos administrativos, sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley, se rigen por las normas de creación y organización (...)”.

Que a través del Decreto 1893 de 2021 se modificó la estructura del Departamento Nacional de Planeación (DNP) para la atención de las funciones de la Entidad, siendo necesario rediseñar el modelo de operación, la estructura y la planta de personal, con sustento en las razones de modernización de que trata el artículo 2.2.12.2. del Decreto 1083 de 2015, entre otras causas, por: i) supresión, fusión o creación de dependencias o modificación de sus funciones; ii) mejoramiento o introducción de procesos o prestación de servicios; y iii) redistribución de funciones y cargas de trabajo.

Que el numeral 4 del artículo 3° del Decreto 1893 de 2021 señaló que es función del DNP “Brindar asesoría y asistencia técnica a las entidades públicas del orden territorial para el desarrollo de sus funciones en los asuntos de su competencia”.

Que el numeral 1 del artículo 6° del Decreto 1893 de 2021 estableció que es función del Despacho del Director General “Dirigir, orientar y controlar las actividades conducentes al cumplimiento de los objetivos del Departamento Nacional de Planeación y ejercer su representación legal”.

Que el numeral 1 del artículo 50 del Decreto 1893 de 2021 señaló como función de la Dirección de Estrategia Regional “Diseñar las estrategias de llegada al territorio de la oferta del DNP, de acuerdo con las funciones y competencia de la entidad, las necesidades de las subdirecciones generales y los lineamientos del Director General”.

Que el diseño de las estrategias de llegada al territorio antes mencionadas, incluye los mecanismos de sinergia, operación e institucionalización territorial, así como la determinación de la dimensión y estructura de operación de los grupos territoriales de despliegue.

Que resultó necesario elaborar la Política Institucional de Llegada a Territorio de la entidad, como punto de partida para la consolidación de un modelo de trabajo que fortalezca la acción territorial, en cumplimiento del objetivo misional de brindar asesoría y asistencia técnica a las entidades públicas del orden territorial para el desarrollo de sus funciones, en los asuntos de competencia del DNP.

Que la citada Política Institucional responde también al cumplimiento del “Pacto por la Descentralización: Conectar territorios, gobiernos y poblaciones”, que hace parte del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 *Pacto por Colombia, pacto por la equidad*, en el cual se reconoció que “prevalecen deficiencias en la llegada a nivel territorial de las estrategias de fortalecimiento y capacitación a funcionarios públicos”, y que, por esta razón, se requiere generar “esfuerzos para coordinar mejor y más eficientemente la llegada a territorio desde

el nivel central, la redefinición de los principales instrumentos para la focalización de la asistencia técnica, y la generación de mecanismos contundentes para generar capacidades locales"; todo ello, enmarcado en el objetivo central del referido Pacto de "Contar con entidades territoriales modernas y fortalecidas, que generen y ejecuten recursos de forma inteligente y pensando en el bienestar de los ciudadanos".

Que, a partir de este marco, se estructuró la Política Institucional de Llegada a Territorio, compuesta de una serie de definiciones, lineamientos y acciones cuyo propósito principal es lograr que todas las unidades técnicas que cuentan con productos o servicios de asistencia técnica territorial (ATT), converjan en una serie de orientaciones estratégicas, operativas y funcionales, que le permitan a la entidad lograr mayores niveles de efectividad en cuanto al acompañamiento y la prestación de servicios de ATT a las entidades territoriales del país, en los asuntos de competencia de este Departamento Administrativo.

Que el documento de la mencionada Política se encuentra dividido en seis apartados. Inicialmente se presenta un breve contexto, cuyo objetivo es encuadrar las variables básicas para entender el alcance y las consideraciones estratégicas, respecto de la llegada a territorio del DNP. Posteriormente, se presentan los siguientes cinco capítulos:

- **Lineamiento 1.** Orientación estratégica de la llegada a territorio del DNP.
- **Lineamiento 2.** Lógica de trabajo de la llegada a territorio del DNP.
- **Lineamiento 3.** Gobierno de la llegada a territorio.
- **Lineamiento 4.** Orientación funcional de la llegada a territorio del DNP.
- **Lineamiento 5.** Seguimiento y evaluación de la ATT.

Que, bajo el panorama expuesto, resulta necesario adoptar la Política Institucional de Llegada a Territorio del DNP, con el fin de que sus lineamientos de diseño, gerencia, operación y monitoreo puedan ser implementados al interior de la entidad. Asimismo, la adopción de esta Política hará posible la puesta en marcha, en el corto y mediano plazo, del programa institucional para la coordinación, el despliegue técnico y operativo de la oferta de productos, servicios e instrumentos disponibles por parte del DNP para llegar a territorio. En este sentido, el documento de Política también servirá como insumo para el proceso de toma de decisiones y la elaboración, validación y formalización de los instrumentos y actos administrativos necesarios para propiciar un cambio de paradigma en el DNP en cuanto a la manera en que cumple con su función misional de brindar asistencia técnica a las entidades territoriales del país en los asuntos que competen a esta entidad.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. *Adopción.* Adóptese la Política Institucional de Llegada a Territorio del Departamento Nacional de Planeación, consignada en el Anexo Técnico que hace parte integral de la presente resolución, como instrumento transversal bajo el cual se fijan las condiciones mínimas para el diseño, gerencia, operación y monitoreo de las estrategias de llegada a territorio que la entidad requiera, en cumplimiento de su función de brindar asesoría y asistencia técnica a las entidades públicas del orden territorial para el desarrollo de sus funciones en los asuntos de competencia de este Departamento Administrativo, y de acuerdo con las necesidades de las subdirecciones generales y los lineamientos de la Dirección General.

Artículo 2°. *Ámbito de Aplicación.* La Política Institucional de Llegada a Territorio del Departamento Nacional de Planeación aplica a las subdirecciones generales, direcciones técnicas y demás dependencias que desarrollen productos y presten servicios de asistencia técnica a favor de las entidades territoriales.

Adicionalmente, la Política será aplicable tanto a la Oficina Asesora de Planeación, para garantizar su articulación funcional con el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y la Plataforma Estratégica, como a la Secretaría General, en lo que respecta a la programación, elaboración y ejecución de los planes de contratación y de adquisición de bienes y servicios asociados a la asistencia técnica territorial.

Artículo 3°. *Principios.* Toda estrategia para llegar a territorio que el Departamento Nacional de Planeación desarrolle deberá observar los siguientes principios:

- a) **Capacidad.** El objetivo de las estrategias de llegada a territorio deberá orientarse a mejorar las capacidades de gobierno y gerencia pública a nivel territorial, a través de acciones de fortalecimiento que redunden en el mejoramiento de las condiciones institucionales para el desarrollo local y regional.
- b) **Alineación.** Se deberá definir la lógica y alineación de intervención con las diferentes dependencias del Departamento Nacional de Planeación, sobre una dinámica de trabajo planificada, organizada y articulada para atender procesos de asistencia técnica en función del fortalecimiento de las capacidades de las entidades territoriales.
- c) **Integralidad.** Se deberá llegar a territorio con una oferta integrada y articulada de fortalecimiento para generar capacidades de gerencia pública que aumenten la entrega eficiente, eficaz y efectiva de bienes públicos locales.
- d) **Monitoreo.** Se deberán fijar los indicadores y metas que permitan monitorear los productos y resultados esperados del despliegue del programa institucional de llegada al territorio, con el fin de establecer los avances y resultados en términos de capacidades de las entidades territoriales.

Artículo 4°. *Pilares.* Los pilares de la Política Institucional de Llegada a Territorio del Departamento Nacional de Planeación, los cuales detallan las condiciones mínimas para el diseño, gerencia, operación y monitoreo de las estrategias de llegada a territorio, serán los siguientes:

1. **ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA.** Toda estrategia de llegada a territorio de una o más dependencias del Departamento Nacional de Planeación deberá definir claramente metas, objetivos e indicadores, de acuerdo con los lineamientos que para tal fin defina la Dirección de Estrategia Regional, en cada uno de los pilares. Adicionalmente, tendrán que observarse las siguientes directrices:
 - 1.1. Las metas deberán fijarse por estrategia y no por dependencia, en función de los productos y resultados para fortalecer las capacidades de las entidades territoriales. Las metas serán definidas por el líder técnico de la respectiva estrategia, serán objeto de seguimiento cada seis meses y al cierre de cada vigencia deberá consolidarse un informe de gerencia para la estructura de gobierno y administración.
 - 1.2. Los objetivos de cada estrategia serán definidos por el líder técnico de esta, en función del principio de *Capacidad*, y de acuerdo con los resultados proyectados por la oferta de productos y servicios de asistencia técnica territorial a cargo de su dependencia.
 - 1.3. En el marco del sistema de seguimiento, desde el Centro de Operación Ampliado (HUB) se revisará el cumplimiento de los hitos, objetivos y avance de resultados de cada estrategia y se consolidará un informe de gerencia semestral para presentar a la Dirección General y subdirecciones generales correspondientes, el cual deberá socializarse al cierre de cada vigencia como insumo para la toma de decisiones sobre la implementación y la planeación estratégica de la entidad.
 - 1.4. Los indicadores de cada estrategia serán definidos por el líder técnico de esta, siguiendo los criterios técnicos establecidos por la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del DNP.
 - 1.5. Las metas, objetivos e indicadores de las estrategias podrán revisarse y ser objeto de modificación en los siguientes casos: (i) con ocasión del proceso de expedición de los planes nacionales de desarrollo; (ii) por necesidad emergente de los ejercicios de planeación estratégica de cada vigencia; (iii) por condiciones técnicas de cálculo, lo cual aplica solo para indicadores; y (iv) por procesos de reestructuración de la entidad. Para estos casos, la Dirección de Estrategia Regional será la encargada de coordinar el proceso de revisión requerido.
2. **LÓGICA INTEGRADA DE TRABAJO.** Toda estrategia de llegada a territorio que una o más dependencias del Departamento Nacional de Planeación diseñe e implemente deberá seguir el paso a paso establecido en la Política Institucional de Llegada a Territorio, que hace parte integral de la presente Resolución como Anexo Técnico. La revisión y actualización de esta lógica de trabajo será responsabilidad de la Dirección de Estrategia Regional, de acuerdo con los resultados del seguimiento y las necesidades que demande el direccionamiento estratégico para la gestión en territorio del DNP.
3. **ESTRUCTURA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.** Toda estrategia de llegada a territorio que una o más dependencias del Departamento Nacional de Planeación diseñe e implemente deberá incorporar una estructura de gobernanza compuesta por: (i) un Centro de Operación Ampliado (HUB); (ii) facilitadores técnicos; (iii) Grupos territoriales de despliegue.
 - 3.1. Para coordinar la gobernanza de todas las estrategias organizacionales del DNP, la Dirección de Estrategia Regional conformará el Centro de operaciones de Llegada a territorio (HUB), desde el que se administre, integre y monitoree la implementación de la llegada a territorio.
4. **MARCO FUNCIONAL ORGANIZACIONAL.** Toda estrategia de llegada a territorio del DNP deberá articularse funcionalmente al Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, bajo tres elementos, a saber: (i) Diseño, ajuste y sostenibilidad de procedimientos o estándares relacionados con el servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades e interrelacionamiento con entidades territoriales; (ii) Integración al proceso de planeación estratégica anual, definición de metas y objetivos organizacionales relacionados con las estrategias de llegada a territorio; (iii) Creación, desarrollo y mantenimiento de trazadores presupuestales que permitan realizar monitoreo de costos-beneficios de las estrategias de llegada a territorio.
 - 4.1. Para estos efectos, la Dirección de Estrategia Regional, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación del DNP, realizará revisiones anuales para determinar los ajustes y actualizaciones que se requieran en la funcionalidad organizacional de la llegada a territorio.
5. **SEGUIMIENTO Y MONITOREO.** Toda estrategia de llegada a territorio que una o más dependencias del DNP diseñen e implementen, deberá adoptar el sistema de seguimiento y monitoreo establecido por la Dirección de Estrategia Regional en cumplimiento del numeral 5 del artículo 50 del Decreto 1893 de 2021.
 - 5.1. El líder técnico de cada estrategia de llegada a territorio será responsable de realizar los reportes requeridos en el sistema de seguimiento, así como la captura

de datos en los formatos establecidos e implementar las rutinas de seguimiento y monitoreo fijadas.

- 5.2. La Dirección de Estrategia Regional coordinará la administración del sistema de seguimiento y monitoreo. de igual forma, consolidará y presentará ante la Dirección General y las subdirecciones generales los informes correspondientes a los avances y cierres de las estrategias.

Artículo 5°. *Desarrollo e Implementación.* La Política Institucional de Llegada a Territorio tendrá una fase de desarrollo e implementación, a través del diseño y ejecución de un programa institucional en el que se identifiquen los productos y servicios vinculados a las estrategias de llegada a territorio del DNP, en el marco de su misionalidad, competencias y funciones. Dicho programa será liderado por la Dirección de Estrategia Regional, quien se encargará de las actualizaciones y ajustes que requieran en vigencia del Decreto 1893 de 2021.

Artículo 6°. *Vigencia.* La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación. Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 19 de mayo de 2022

La Directora General,

Alejandra Carolina Botero Barco.

(C. F.)

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Comisión de Regulación de Energía y Gas

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 101 013 DE 2022

(abril 29)

por la cual se establece la metodología para la determinación de costos máximos por la prestación del servicio de alumbrado público.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en desarrollo de los Decretos 1524, 2253 de 1994 y 1260 de 2013, Decreto 1073 de 2015, y la Resolución 41066 de 2018.

CONSIDERANDO QUE:

El artículo 365 de la Constitución de la Constitución Política de Colombia señala que los servicios públicos son inherentes a la finalidad del Estado, y es su deber asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

A través del Decreto 2424 de 2006 expedido por el Ministerio de Minas y Energía, se estableció que los municipios o distritos son los responsables de la prestación del servicio de alumbrado público, y se asignó a la CREG la función de establecer una metodología para la determinación de los costos máximos que deben aplicar los municipios o distritos, con fundamento en lo cual la Comisión de Regulación de Energía y Gas expidió la Resolución CREG 123 de 2011.

El Gobierno nacional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, expidió la Ley 1819 de 2016, Capítulo IV, mediante la cual establece principios y elementos de la obligación tributaria para la prestación del servicio de alumbrado público por parte de los municipios y distritos del país.

El artículo 351 de la Ley 1819 de 2016 dispuso que, para la determinación del valor del impuesto por recaudar, los municipios y distritos deberán considerar como criterio de referencia el valor total de los costos estimados de prestación en cada componente de servicio; para ello, deberán realizar un estudio técnico de referencia de determinación de costos de la prestación del servicio de alumbrado público, de conformidad con la metodología para la determinación de costos establecida por el Ministerio de Minas y Energía o la entidad que delegue.

Mediante el Decreto 943 de 2018, el Ministerio de Minas y Energía modifica y adiciona la Sección 1, Capítulo 6 del Título III del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, relacionado con la prestación del servicio de alumbrado público, y lo define como un servicio público no domiciliario de iluminación, inherente al servicio de energía eléctrica, que se presta con el fin de dar visibilidad al espacio público y demás espacios de libre circulación, con tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y rural de un municipio o distrito, para el normal desarrollo de las actividades. (...).

El Decreto 943 de 2018, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 351 de la Ley 1819 de 2016, señala como criterio de referencia para la determinación del impuesto de alumbrado público, el valor total de los costos estimados de prestación en cada componente del servicio para la elaboración del Estudio Técnico de Referencia que deben desarrollar los municipios o distritos, y enuncia los criterios mínimos por tener en cuenta.

De igual forma, el párrafo 1° del artículo 4° del citado Decreto señala que la modernización, expansión y reposición del sistema de alumbrado público debe buscar

la optimización de los costos anuales de inversión, suministro de energía y los gastos de administración, operación, mantenimiento e interventoría, así como la incorporación de desarrollos tecnológicos. Las mayores eficiencias logradas en la prestación del servicio que se generen por la reposición, mejora, o modernización del sistema deberán reflejarse en el estudio técnico de referencia.

El artículo 2.2.3.6.1.3. del Decreto 1073 de 2015 dispone además que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 351 de la Ley 1819 de 2016, los municipios o distritos en la elaboración del Estudio Técnico de Referencia deberán tener en cuenta, entre otros aspectos, la definición de las expansiones del servicio, armonizadas con el Plan de Ordenamiento Territorial y con los planes de expansión de otros servicios públicos, cumpliendo con los requisitos del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, RETIE, así como del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público, RETILAP, y demás disposiciones técnicas que expida el Ministerio de Minas y Energía sobre la materia.

Mediante la Resolución 4 1066 de 2018, el Ministerio de Minas y Energía, MME, delega en la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, el establecimiento de la Metodología para la determinación de los costos máximos por la prestación del servicio de alumbrado público.

El Gobierno nacional expidió la Ley 697 de 2001, mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones. El Ministerio de Minas y Energía, como responsable de promover, organizar, asegurar el desarrollo y el seguimiento de los programas de uso racional y eficiente de la energía, incluyó dentro del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (Retilap), los requisitos de eficacia mínima y vida útil de las fuentes lumínicas que deben cumplir los “sistemas de iluminación” de alumbrado público tendientes a garantizar los niveles y calidad de la energía lumínica requerida en la actividad visual, la protección al consumidor, el uso racional y eficiente de la energía, la protección de la vida y salud humana, la preservación del medio ambiente, así como la prevención de prácticas que puedan inducir a error al usuario.

Conforme lo expuesto, se encuentra necesario realizar la actualización a la metodología de determinación de costos para la prestación del servicio de alumbrado público.

Mediante la Resolución CREG 037 de 2021 se ordenó hacer público un proyecto de resolución “por la cual se establece la metodología para la determinación de los costos máximos por la prestación del servicio de alumbrado público”. Sobre esta publicación se recibieron comentarios en las siguientes comunicaciones: Jorge Venencia Villate con radicado CREG E-2021-006150; Edwin Ancizar Pérez Rueda, E-2021-006402; Óscar Fernando Moncayo Burgos, Alcaldía Municipal de Pasto, E-2021-006337; Edison Ariel Perilla López, Alcaldía de Medellín, E-2021-006482; Roberto Mauricio Córdoba Fajardo, E-2021-006803; Jesús Alonso Arbeláez Arcila, Empresa de Energía de Pereira, E-2021-006839; Jorge William González Tamayo, E-2021-006931; Diego Jiménez, E-2021-006942; Emcali EICE E.S.P., E-2021-006990; Pablo Einar Ortega Bautista, E-2021-006991 y E-2021-006992; ANAP, E-2021-006916 y E-2021-006993, Ahorro y Eficiencia Energética S.A.S, E-2021-006999; Asociación Nacional de Empresarios - Cámara de Grandes Consumidores de Energía y Gas, E-2021-007063; Interventoría Alumbrado Público de Bogotá -Universidad Nacional de Colombia, E-2021-007062; EPM-Carlos Mario Palacios Builes, E-2021-007061; Beandra Mogollón Petro, E-2021-007005; Maritza Rosero Narváez, E-2021-007007; Emcali EICE E.S.P., E-2021-007018 y E-2021-007023; Dolmen, E-2021-007021; Asocodis, E-2021-007030; Unión Temporal Alumbrado Público, E-2021-007033; Cedenar, E-2021-007037; Codensa, E-2021-007045; Diego Jiménez, E-2021-007047; Alcaldía de Santiago de Cali, E-2021-007048; Fernando Medina Higuera E-2021-007053; SAYOP, E-2021-007064; Universidad Nacional de Colombia, E-2021-007065; UAESP, E-2021-007067; Pablo Einar Ortega Bautista, E-2021-007068; AIR-e, E-2021-007069; ANAP, E-2021-007071; ANAP, E-2021-007072; Bolsa Mercantil de Colombia, E-2021-007073; Armando Gutiérrez Castro, E-2021-007086; ANAP, E-2021-007087; CEO, E-2021-007106; Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones Andesco, E-2021-007175.

El análisis de las observaciones y sugerencias recibidas en la consulta realizada a través de la Resolución CREG 037 de 2021 se encuentra en el documento soporte CREG 101 013 de 2022.

Diligenciado el cuestionario de que trata el artículo 2.2.2.30.4 del Decreto 1074 de 2015, se encontró que la regulación propuesta no tiene incidencia sobre la libre competencia, por lo cual no fue informado a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

La Comisión, en la Sesión 1165 del 29 de abril de 2022, aprobó expedir la presente resolución.

RESUELVE:

Artículo 1°. *Objeto.* Mediante la presente resolución se establece la metodología para la determinación de costos máximos por la prestación del servicio de alumbrado público.

CAPÍTULO I

Ámbito, Definiciones y Criterios Generales

Artículo 2°. *Ámbito de Aplicación.* Esta Resolución aplica a los responsables de la prestación del Servicio de Alumbrado Público señalados en el artículo 2.2.3.6.1.2 del Decreto 1073 de 2015, Único Reglamentario del sector Administrativo de Minas y Energía.

Artículo 3°. *Definiciones.* Para la interpretación y aplicación de la presente resolución se tendrán en cuenta, además de las definiciones establecidas en las Leyes 142 y 143 de